

Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre el Juzgado de Garantías n° 8 y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1, ambos de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa iniciada a partir de la denuncia de S i M G, para ubicar el paradero de su hija, de quince años de edad.

Conforme surge de sus dichos, el 16 de marzo del corriente año, mientras volvía con una de sus hermanas de visitar a su padre, la menor se despidió en la esquina de su domicilio de Burzaco, partido de Almirante Brown, diciéndole que se iba a la casa de una amiga de nombre "Juliana", adonde nunca llegó. Seis días después, G recibió una llamada de un número desconocido, por medio de la cual su hija le manifestó con tono de voz lloroso que se encontraba en la casa de los tíos de unas personas de nombre "K", "F" y "B". Según refirió la denunciante, por versiones de algunos allegados, esta vivienda se ubicaría en Longchamps y pertenecería a un hombre llamado "é", quien –agregó– se dedicaría al narcotráfico y usaría a la menor para "pasar droga" entre sus ropas (fs. 1/vta., 15/vta., 28/30).

De acuerdo con las declaraciones de G basadas en lo que oportunamente le manifestara la menor, cuyo testimonio coincide con el brindado en cámara "Gesell", y la denuncia de aquélla a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, resulta que luego de despedirse de su hermana, la niña se dirigió a la estación de trenes de Burzaco para encontrarse con "B", quien le pidió que la acompañase hasta la estación de Alejandro Korn. Ya en este lugar

tomaron un colectivo hasta un domicilio desconocido, donde tras un llamado telefónico efectuado por "B", se acercó una camioneta negra de la que bajó un tal "C", conocido de ambas, quien insistentemente la invitó a subir, lo cual aceptó. Comentó la víctima que dentro del rodado había otros tres individuos con armas de fuego que la amenazaban, mientras "C" le vendaba los ojos y le tapaba la boca. Luego la trasladaron hasta una vivienda de dos plantas y la dejaron sola en el piso de arriba, maniatada y con los ojos cubiertos, desde donde oyó gritos de otras mujeres. Relató que allí, algunos hombres le sacaron fotos, la vistieron con polleras y camisas cortas y le dieron "pastillas" que le hacían sentir el cuerpo rígido; la golpearon, la "tocaron" y la usaron para "pasar" droga. Cierta día la subieron a la camioneta diciéndole que irían a un prostíbulo situado en Longchamps; luego la trasladaron a un galpón de la Villa Betharram, en Adrogué, y después a la Villa 1-11-14 del barrio de Flores de esta ciudad, donde junto a otras jóvenes la exhibieron y la ofrecieron por sumas de dinero. Finalmente logró escapar de su cautiverio y fue encontrada por su madre en una plaza de Burzaco el 26 de marzo de este año, con ropas sucias y en estado de exaltación (fs. 86/89, 111/116, 172/vta., 249 vta. y 343 vta.).

Días después de que apareciera, la menor -quien padece de retraso mental y madurativo- debió ser internada en dos clínicas psiquiátricas y medicada a raíz de un cuadro de estrés agudo traumático, en el cual manifestó comportamientos agresivos, angustia, llantos, insomnio e ideas y conductas suicidas. Durante su internación manifestó haber sido sometida a maltratos y abusos sexuales en el tiempo que permaneció secuestrada (fs. 31, 117/vta., 119 y 145, fs. 226/235 y fs. 309/336).

De acuerdo con la opinión de la fiscal, el juez de garantías sostuvo que los hechos objeto de investigación podrían configurar el delito de trata de personas, por lo que, con cita de la actual jurisprudencia de V.E. en la materia y más allá de advertir la comisión de otras figuras típicas que, a su entender, no deberían juzgarse por separado, declinó su competencia a favor de la justicia federal (fs. 342/345 vta.).

Esta última, por su parte, no aceptó la declinatoria por prematura. En este sentido, y luego de señalar la falta de remisión de una copia de la reproducción de los dichos de la menor brindados en sala "Gesell", y el planteo de nulidad de esa diligencia, efectuado por la defensora oficial, concluyó en que la pesquisa carecía aún de elementos de prueba esenciales que permitan tener por mínimamente corroborada la existencia de aquel delito (fs. 353/355 vta.).

Devueltas las actuaciones, el juzgado de origen mantuvo su criterio, tuvo por trabada la contienda y elevó el respectivo incidente a la Corte (fs. 356/358 vta.).

Cabe destacar que aún cuando no fue glosado al incidente el informe sobre la entrevista realizada a la víctima en "cámara Gesell", el testimonio allí vertido –el que, por cierto, resulta válido hasta el momento (cf. informe actuarial que antecede)- puede ser tenido en cuenta para resolver este conflicto, pues tanto la fiscalía como el juzgado de garantías son contestes en señalar que se condice con las anteriores manifestaciones de la menor a su madre y las declaraciones de ésta ante la prevención y en sede judicial (fs. 249 vta. y 343 vta.).

Acerca del fondo de la cuestión, considero que ésta debe ser resuelta de acuerdo con el criterio establecido en las Competencias n° 538, L.

XLV, "Fiscal s/Av. presuntos delitos de acción pública" y n° 1016, L. XLVI, "Abratte, Gloria Liliana s/ denuncia", resueltas el 23 de febrero de 2010 y el 5 de julio de 2011, respectivamente.

En efecto, tal como quedó expuesto al comienzo de este dictamen, los elementos probatorios reunidos hasta el momento en la causa dan cuenta de la existencia de algunos extremos inherentes al delito de trata de personas con fines de explotación sexual infantil, que no permiten descartar su comisión, tales como el traslado de la menor entre distintos lugares del sur del Gran Buenos Aires y de esta ciudad, donde fue exhibida y ofrecida por dinero, presuntamente para su venta o prostitución; la privación de su libertad por varios días junto a otras mujeres, en cuyo contexto habría sido sometida a múltiples maltratos (amenazas, golpes, abusos sexuales y posible suministro de drogas), a raíz de lo cual debió ser internada en clínicas psiquiátricas y medicada por un cuadro de estrés agudo; por último, la participación en los hechos de un conjunto de personas que tendría vinculación con el comercio sexual y de estupefacientes.


Por lo tanto, y teniendo en cuenta que frente a determinadas circunstancias que indiquen la posible comisión del delito de trata de personas, resulta de fundamental importancia mantener y promover la competencia del fuero federal para asegurar la eficacia de la norma que lo reprime (cf. jurisprudencia citada), considero que corresponde al magistrado de excepción asumir la investigación de las presentes actuaciones, sin perjuicio de lo que resulte del trámite ulterior.

Buenos Aires, 8 de OCTUBRE de 2013.

ES COPIA

EDUARDO EZEQUIEL CASAL

RES. PGN 2066/13.


ADRIANA MARCHISIO
Prosecretaría Administrativa
Procuración General de la Nación